



Rama Judicial  
República de Colombia

Santiago de Cali veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021)

RADICACION	76001-33-31-010-2013-00003-01
ACCION	EJECUTIVA
DEMANDANTE	MARIA ELSY REYES SALCEDO
DEMANDADO	UGPP
MAGISTRADO PONENTE	VICTOR ADOLFO HERÁNDEZ DÍAZ
ASUNTO	APELACION AUTO

AUTO INTERLOCUTORIO No.023

Decide la Sala la apelación interpuesta por la apoderada de la parte ejecutada contra el auto del 12 de junio de 2017 que decretó medidas cautelares sobre los dineros que tenga la Unidad Administrativa de Gestión Pensional- UGPP en las diferentes entidades bancarias.

La presente providencia tiene como ponente al Magistrado **VICTOR ADOLFO HERNANDEZ DIAZ** quien recibió el expediente, luego de que el proyecto de providencia inicial, presentado por la Magistrada **ANA MARGOTH CHAMORRO BENAVIDES**, quien tiene a cargo el proceso, fuera derrotada.

1. ANTECEDENTES

En ejercicio de la acción ejecutiva, la señora María Nelsy Reyes Salcedo, por conducto de apoderado judicial, presentó demanda en contra de la UGPP, con miras a obtener el pago de la condena impuesta por el Juzgado Décimo Administrativo de Cali que declaró la nulidad de la resolución No. 31552 del 27 de diciembre de 2004 y ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social reconocer en favor de la ejecutante las diferencias que resulten de la pensión ya reconocida hasta el momento en que se practique la correspondiente liquidación.

El apoderado de la parte ejecutante en escrito separado solicito se decretarán la medida cautelar de embargo de los depósitos que posea la entidad en los siguientes establecimientos bancarios: "Banco de Bogotá, de Occidente, Popular, Agrario, Bancolombia, Bancoomeva, Av Villas, Caja Social, Davivienda, City Bank, Corrbanca, Sudameris y Helm."

Mediante auto del 12 de junio de 2017 el Juzgado Diecinueve Administrativo de Cali decretó el embargo y retención de los dineros que la UGPP identificada con NIT No. 900.373.913-4 posea en las siguientes entidades financieras: Banco De Bogotá, Banco De Occidente, Banco Popular, Banco Agrario, Bancolombia, Bancoomeva, Banco Av

Villas, Banco Caja Social, Banco Davivienda, City Bank, Banco Corpbanca, Banco Sudameris, Helm Bank, Falabella, Bbva, Pichincha, Hsbc, Bancamia Y Procredit, dejando la salvedad de que si los dineros depositados a cualquier título en dichas entidades bancaria pertenecen a bienes inembargables de los enunciados en el artículo 594 del CGP, la entidad financiera deberá abstenerse de aplicar la medida. Libró oficio a las 18 entidades bancarias limitando la medida al monto de diez millones de pesos (\$10.000.000,00) (Fl. 4).

La entidad ejecuta presentó recurso de apelación indicando que todos los bienes que posee la UGPP ostentan la calidad de inembargables en razón a la protección de los recursos del Estado, por lo que solicita se revoque la decisión proferida mediante auto del 12 de junio de 2017 (Fl. 6-8).

Mediante memorial el apoderado de la parte actora se pronunció respecto del recurso interpuesto indicando que la medida decretada no cumple lo estipulado en el numeral 10 inciso 3 del artículo 593 del CGP que enuncia la forma de establecer el monto de la retención dineraria, por lo que solicitó reconsiderar la cuantía del embargo (Fl. 11-12).

Mediante auto del 5 de octubre de 2017 el Juzgado concedió el recurso interpuesto.

El expediente fue repartido al Despacho 11 del Tribunal Administrativo del Valle mediante acta de reparto del 26 de octubre de 2017 (Fl. 19).

Mediante memorial del 1 de noviembre de 2017 el apoderado de la parte actora solicitó declarar la nulidad de lo actuado indicando que el Juzgado de primera instancia omitió correr traslado del recurso interpuesto por la UGPP (Fl. 20).

Mediante auto del 9 de agosto de 2018 el Despacho ordenó a la Secretaría de la Corporación correr traslado del recurso interpuesto por la UGPP (Fl. 22).

El apoderado de la parte ejecutante mediante memorial del 24 de agosto de 2018 descurre el traslado del recurso indicando que en la página de la rama judicial no se evidencia la actuación del traslado del recurso a la parte actora y anexa impresión de fecha 15 de marzo de 2018 (Fl. 23-26).

Mediante auto del 18 de octubre de 2018 el Despacho de conocimiento resolvió tener por saneada la nulidad consagrada en el numeral 6 del artículo 133 del CGP y ordenó al a quo que a costa de la parte ejecutante remita copia de la demanda ejecutiva, el auto que libró mandamiento de pago, el auto que ordenó seguir adelante con la ejecución y el auto que aprobó la liquidación del crédito (siempre y cuando este en firme) (Fl. 30-33).

Cumplido lo anterior, el expediente pasó a Despacho para proveer.

## CONSIDERACIONES

Las medidas cautelares se encuentran implementadas en el ordenamiento jurídico para prevenir y precaver las contingencias que pudieren sobrevenir sobre los bienes o las personas mientras se inicia o se adelanta un proceso<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, auto de 26 de marzo de 2009, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Expediente 34882.

Conforme el precedente marcado por el Consejo de Estado <sup>2</sup> y la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca<sup>3</sup>, la norma procesal bajo la cual se tramita el juicio ejecutivo ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa es el Código General del Proceso, por la regla general de remisión contenida en el artículo 306 del CPACA<sup>4</sup>.

El artículo 599 del C.G.P. señala la procedencia de las medidas cautelares en procesos ejecutivos, el artículo 593 *ibídem* contempla la forma de efectuar la orden de embargo de bienes susceptibles de la medida, y finalmente en el artículo 594, consagra el principio de Inembargabilidad respecto de ciertos bienes, así:

**"Artículo 594.** *Además de los bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán embargar:*

1. *Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social.*

(...)

**PARÁGRAFO.** *Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendrán de decretar órdenes de embargo sobre recursos inembargables. En el evento en que por ley fuere procedente decretar la medida no obstante su carácter de inembargable, deberán invocar en la orden de embargo el fundamento legal para su procedencia.*

*Recibida una orden de embargo que afecte recursos de naturaleza inembargable, en la cual no se indicare el fundamento legal para la procedencia de la excepción, el destinatario de la orden de embargo, se podrá abstener de cumplir la orden judicial o administrativa, dada la naturaleza de inembargable de los recursos. En tal evento, la entidad destinataria de la medida, deberá informar al día hábil siguiente a la autoridad que decretó la medida, sobre el hecho de no acatamiento de la medida por cuanto dichos recursos ostentan la calidad de inembargables. La autoridad que decretó la medida deberá pronunciarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de envío de la comunicación, acerca de si procede alguna excepción legal a la regla de Inembargabilidad. Si pasados tres (3) días hábiles el destinatario no se recibe oficio alguno, se entenderá revocada la medida cautelar.*

*En el evento de que la autoridad judicial o administrativa insista en la medida de embargo, la entidad destinataria cumplirá la orden, pero congelando los recursos en una cuenta especial que devengue intereses en las mismas condiciones de la cuenta o producto de la cual se produce el débito por cuenta del embargo. En todo caso, las sumas retenidas solamente se pondrán a disposición del juzgado, cuando cobre ejecutoria la sentencia o la providencia que le ponga fin al proceso que así lo ordene."*

### Excepciones al principio de inembargabilidad de los recursos públicos.

Se debe señalar que la inembargabilidad de los bienes y rentas públicos constituye un principio de rango Constitucional a la luz de lo señalado en el artículo 63 de la C.P, el cual encuentra su razón de ser en la protección de los recursos necesarios para el cumplimiento de los fines Estatales.

<sup>2</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Consejera Ponente: Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Auto 2013-00870/0577-2017 de mayo 18 de 2017. Expediente N°: 150012333000201300870 02 (0577-2017). Proceso: Ejecutivo. Demandante: Dolly Castañeda y Rubén Darío Mejía Martínez, Demandado: Departamento de Boyacá

<sup>3</sup> Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Plena, providencia de 5 de abril de 2017, Magistrado Ponente Dr. FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ. Ejecutivo Radicación: 76001-33-33-018-2016-00229-01.

<sup>4</sup> Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente: Enrique Gil Botero, Bogotá D.C. veinticinco (25) de junio de dos mil catorce (2014), Radicación Numero: 25000-23-36-000-2012-00395-01(IJ), Demandante: Café Salud Entidad Promotora de Salud S.A., Demandado: Nación-Ministerio de Salud y de la Protección Social

La regla general es la inembargabilidad de los recursos públicos, tal como lo establece el artículo 19 del Estatuto Orgánico del Presupuesto<sup>5</sup>, incluyendo dentro de esta prohibición las cesiones y participaciones de que trata el capítulo cuarto del título XII de la Constitución Política.

En ese sentido, si bien es cierto que la regla general está dada por la inembargabilidad de los recursos públicos, ha de advertirse que las normas que consagran dicha prohibición fueron demandadas en diversas oportunidades, siendo entonces la Corte Constitucional quien se ocupó de establecer los límites a dicha regla.

Así las cosas, en un primer momento la Corte Constitucional en sentencia C-542 de 1992, sostuvo:

*"De las anteriores consideraciones se desprende un conflicto entre dos valores que deben ser sopesados y analizados para tomar una decisión sobre la exequibilidad de las normas demandadas: el primero de estos valores tiene que ver con la protección de los recursos económicos del Estado y del interés general abstracto que de allí se desprende. El segundo valor en conflicto está vinculado con la efectiva protección del derecho fundamental al pago del salario de los trabajadores vinculados con el Estado.*

*Como ya fue señalado, la Corte Suprema de Justicia bajo el imperio de la Constitución anterior resolvió el conflicto normativo en favor de la norma legal y del interés general abstracto que ella respalda.*

*La Corte Constitucional, en cambio, sostiene que en todo caso de conflicto entre los valores mencionados, debe prevalecer el derecho de los trabajadores a la efectividad del pago de su salario. El énfasis en esta afirmación, que no admite excepción alguna, sin embargo no impide que esta Corte admita la importancia del interés general abstracto.*

(...)

*Sin embargo, debe esta Corte dejar claramente sentado que este postulado excluye temporalmente, el caso en que, la efectividad del pago de obligaciones dinerarias a cargo del Estado surgidas de obligaciones laborales exige el embargo de bienes y recursos incorporados al Presupuesto General de la Nación.*

(...)

*En consecuencia esta Corte considera que en aquellos casos en los cuales la efectividad del pago de las obligaciones dinerarias a cargo del Estado surgidas de las obligaciones laborales, solo se logre mediante el embargo de bienes y rentas incorporados al presupuesto de la nación, este será embargable en los términos del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.*

Conforme la jurisprudencia señalada, los recursos del Presupuesto General de la Nación son, por excepción, embargables por obligaciones de tipo laboral, advirtiendo de esta manera que el principio de inembargabilidad no resulta absoluto, teniendo en cuenta que no pueden desconocerse los derechos de los trabajadores, so pretexto de la primacía del interés general.

En el mismo sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-1154 de 2008, sostuvo:

*"El legislador ha adoptado como regla general la inembargabilidad de los recursos públicos (...) pero ante la necesidad de armonizar esa cláusula con los demás principios (...) la jurisprudencia ha fijado algunas reglas de excepción...*

*i) Cuando se pretenda satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral.*

---

<sup>5</sup> "Son inembargables las rentas incorporadas en el presupuesto general de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman."

- ii) *Se busque el pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad Jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias.*
- iii) *Cuando la petición se origine en títulos emanados del Estado..."*

La misma Corporación en sentencia C-543 de 2013 reiteró:

Por su parte, la Corte Constitucional, al fijar el contenido y alcance del artículo 63 sobre el tema en discusión, ha sostenido que el principio de inembargabilidad es una garantía que se hace necesario preservar y defender, con el fin de proteger los recursos financieros del Estado, en particular, los destinados a cubrir las necesidades esenciales de la población. Esto, por cuanto si se permitiera el embargo de todos los recursos y bienes públicos (i) el Estado se expondría a una parálisis financiera para realizar el cometido de sus fines esenciales, y (ii) se desconocería el principio de la prevalencia del interés general frente al particular, el artículo 1 y el preámbulo de la Carta Superior.

Sin embargo, contempló excepciones a la regla general para armonizar el principio de inembargabilidad de recursos públicos con otros principios, valores y derechos constitucionales, entre los que se encuentran, la dignidad humana, la vigencia de un orden justo y el derecho al trabajo. Éstas son:

- (i) Satisfacción de créditos u obligaciones de origen laboral con el fin de hacer efectivo el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas.
- (ii) Pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y la realización de los derechos en ellas contenidos.
- (iii) Títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible.
- (iv) Las anteriores excepciones son aplicables respecto de los recursos del SGP, siempre y cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educación, salud, agua potable y saneamiento básico)"

"Frente a los criterios laborales (segunda excepción), la situación es diferente aunque no exista ley expresa que así lo señale, pero si principios constitucionales que avalan la interpretación dada por la Corte Constitucional en el fallo aludido, con miras a lograr la efectividad de los derechos reconocidos mediante actos administrativos (ver sentencia C-546). En este sentido, la ejecución en este campo, con las medidas cautelares propias del proceso ejecutivo, encuentra su respaldo en lo que disponen 25 y 53 de la Carta, por ser el trabajo un derecho y una obligación social, frente al cual el Estado no sólo garantiza el derecho al pago oportuno de lo debido, sino también que la ley, los contratos, los acuerdos y convenios no podrán menoscabar los derechos de los trabajadores"

En el mismo sentido, el H. Consejo de Estado H. Consejo de Estado, Sección Cuarta, en auto del 8 de mayo de 2014 con ponencia del consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Radicado Interno No. 19717 señaló en relación con la naturaleza inembargable de los recursos del Estado, que dicha regla no es absoluta frente a créditos de carácter laboral, así:

## **"2.5 El principio de inembargabilidad de recursos públicos**

*La Corte ha sostenido que este principio tiene sustento constitucional (art. 63) en la protección de los recursos y bienes del Estado y la facultad de administración y manejo que a éste compete, que permite asegurar la consecución de los fines de interés general que conlleva la necesidad de hacer efectivos materialmente los derechos fundamentales y, en general, el cumplimiento de los diferentes cometidos estatales<sup>6</sup>.*

<sup>6</sup> Cfr. sentencias C-546 de 1992, C-337 de 1993, C-103 de 1994, C-354 de 1997, C-793 de 2002, C-566 de 2003 y C-192 de 2005.



*No obstante, este principio no puede ser considerado absoluto, pues la aplicación del mismo debe entenderse de acuerdo a los parámetros fijados por la jurisprudencia constitucional.*

*Es por esto que la Corte en reiteradas oportunidades ha sostenido que el citado principio respecto del presupuesto de las entidades y órganos del Estado encuentra algunas excepciones cuando se trate de<sup>7</sup>:*

*i) la satisfacción de créditos u obligaciones de origen laborales, necesaria para realizar el principio de dignidad humana y efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas<sup>8</sup>;*

*ii) sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas decisiones<sup>9</sup>; y*

*iii) títulos que provengan del Estado<sup>10</sup> que reconozcan una obligación clara, expresa y actualmente exigible<sup>11</sup>. Tanto valor tiene el crédito que se reconoce en una sentencia como el que crea el propio Estado a través de los modos o formas de actuación administrativa que regula la ley.*

*Tratándose de los recursos del Sistema General de Participaciones, la Corte Constitucional ha dicho que el artículo 21 del Decreto 28 de 2008<sup>12</sup>, teniendo en cuenta la regulación vigente a partir del Acto Legislativo No. 4 de 2007, se ajusta a la Constitución, en la medida en que se consagra la inembargabilidad de los recursos del SGP a la vez que autoriza el embargo de otros recursos del presupuesto de las entidades territoriales, de modo que garantiza la destinación social constitucional del SGP sin desconocer los demás principios y valores reconocidos en la Carta Política, particularmente en cuanto a la efectividad de las obligaciones de orden laboral<sup>13</sup>.*

*Por lo anterior, se declaró la exequibilidad de esta norma, en el entendido que el pago de las obligaciones laborales reconocidas mediante sentencia debe efectuarse en el plazo máximo de dieciocho (18) meses, contados a partir de la ejecutoria de la misma, y de que si los recursos correspondientes a los ingresos corrientes de libre destinación de la respectiva entidad territorial no son suficientes para el pago de las citadas obligaciones, deberá acudir a los recursos de destinación específica. Interpretación que es compatible con la Constitución Política en tanto asegura la efectividad de los derechos y ofrece certeza sobre el pago de acreencias laborales. –Subrayas fuera del texto–*

## **2.6 Procedimiento para el pago de créditos a cargo del Estado**

*El artículo 19 del Decreto 111 de 1996<sup>14</sup> prevé que son inembargables las rentas incorporadas en el Presupuesto General de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman.*

*Sin embargo, señala que "los funcionarios competentes deberán adoptar las medidas conducentes al pago de las sentencias en contra de los órganos respectivos, dentro de los plazos establecidos para ello, y respetarán en su integridad los derechos reconocidos a terceros en estas sentencias".*

<sup>7</sup> Cfr. sentencias C-1154 de 2008 y C-539 de 2010.

<sup>8</sup> Cfr. sentencias C-013 de 1993, C-017 de 1993, C-337 de 1993, C-103 de 1994, C-263 de 1994, T-025 de 1995, T-262 de 1997, C-354 de 1997, C-402 de 1997, T-531 de 1999, T-539 de 2002, C-793 de 2002, C-566 de 2003, C-1064 de 2003 y T-1195 de 2004.

<sup>9</sup> Cfr. sentencia C-354 de 1997, C-402 de 1997, T-531 de 1999, T-539 de 2002, C-793 de 2002 y C-192 de 2005, entre otras.

<sup>10</sup> Que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos.

<sup>11</sup> Cfr. sentencia C-354 de 1997.

<sup>12</sup> Inembargabilidad. Los recursos del Sistema General de Participaciones son inembargables.

Para evitar situaciones derivadas de decisiones judiciales que afecten la continuidad, cobertura y calidad de los servicios financiados con cargo a estos recursos, las medidas cautelares que adopten las autoridades judiciales relacionadas con obligaciones laborales, se harán efectivas sobre ingresos corrientes de libre destinación de la respectiva entidad territorial. Para cumplir con la decisión judicial, la entidad territorial presupuestará el monto del recurso a comprometer y cancelará el respectivo crédito judicial en el transcurso de la vigencia o vigencias fiscales subsiguientes.

Las decisiones de la autoridad judicial que contravengan lo dispuesto en el presente decreto, no producirán efecto alguno, y darán lugar a causal de destitución del cargo conforme a las normas legales correspondientes.

<sup>13</sup> Cfr. sentencia C-1154 de 2008.

<sup>14</sup> Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto.

*Adicionalmente, previene a los funcionarios judiciales para que se abstengan de decretar órdenes de embargo cuando no se ajusten a lo dispuesto en este artículo, so pena de mala conducta.*

*Esta norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional en el entendido que los créditos a cargo del Estado, bien sean que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que se indica en esta norma y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos- y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos<sup>15</sup>.*

*En esa oportunidad advirtió la Corte que cuando se trate de títulos que consten en un acto administrativo, éstos necesariamente deben contener una obligación clara, expresa y actualmente exigible que emane del mismo título y que en el evento de que se produzca un acto administrativo en forma manifiestamente fraudulenta, es posible su revocación por la administración.*

*En síntesis, la regla general es la inembargabilidad de las rentas y recursos del Estado, salvo que se trate de créditos laborales, el pago de sentencias y demás obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles a cargo del Estado, para lo cual debe acudir al procedimiento señalado en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo o en los artículos 192, 194, 195 y 297 a 299 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según sea el caso<sup>16</sup>.*

*Ahora bien, tratándose de recursos provenientes del SGP, éstos también son inembargables con la única excepción respecto de las obligaciones de naturaleza laboral<sup>17</sup>.*

Así las cosas, conforme a la jurisprudencia, que se acaba de analizar, se puede concluir que para obtener el pago de obligaciones laborales de especial protección constitucional, que consten en sentencias judiciales o en actos administrativos debidamente ejecutoriados, respecto de las cuales no hayan sido canceladas por la vía administrativa o judicial, resulta procedente el inicio de procesos ejecutivos en contra de las distintas entidades estatales, los cuales pueden implicar el decreto de embargo de dineros y bienes de carácter público.

#### Caso concreto.

El apoderado judicial de la parte ejecutada solicita se revoque la decisión que decretó el embargo sobre los dineros que la UGPP posea en las entidades bancarias., por tener la calidad de inembargables.

Al respecto la Sala precisa que, si bien la regla general es que los recursos de las entidades públicas que hacen parte el Presupuesto General de la Nación son por naturaleza inembargables, no obstante, cuando las sumas objeto de ejecución se derivan de una sentencia judicial y además se refieren a acreencias laborales, se estructura una de las excepciones al principio antes mencionado, las cuales han sido reiteradas por la Corte Constitucional.

<sup>15</sup> Cfr. sentencia C-354 de 1997.

<sup>16</sup> Artículo 336 del C. de P. C. señala que "La Nación no puede ser ejecutada, salvo en el caso contemplado en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. Cuando las condenas a que se refiere el artículo 335 se hayan impuesto a un departamento, una intendencia, una comisaría, un distrito especial, o un municipio, la respectiva entidad dispondrá de seis meses para el pago, sin que entre tanto pueda librarse ejecución contra ella, ni contarse el término establecido en dicho artículo.

El término de seis meses que establece el inciso anterior, se contará desde la ejecutoria de la sentencia o de la providencia que la complementa; pero cuando se hubiere apelado de aquélla o de ésta, comenzará a correr desde la ejecutoria del auto de obediencia a lo resuelto por el superior.

En este orden de ideas, y como quiera que la solicitud de la medida cautelar de embargo de las cuentas de la UGPP, hecha por el apoderado del ejecutante, tiene como finalidad garantizar el pago de la reliquidación de la pensión de la señora MARIA NELSY REYES SALCEDO, derecho cuyo reconocimiento y pago fue ordenado mediante sentencia judicial ejecutoriada, ha solicitado su cumplimiento previa ejecución; considera la Sala procedente decreto de la medida solicitada, pues se trata de i) la satisfacción de créditos u obligaciones de origen laboral, dictado en ii) sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidas en dichas decisiones; y iii) se trata de un derecho laboral de carácter pensional que cuenta con protección constitucional.

Por último, se observa que el apoderado judicial de la parte actora manifestó que el límite del embargo no se realizó conforme el artículo 599 del C.G.P.; al respecto, es preciso señalar que este argumento no fue objeto de recurso de apelación, por lo que no puede ser tenido en cuenta, ni resuelto en esta instancia.

Por lo expuesto, se confirmará el auto del 12 de junio de 2017 proferido por el Juzgado Diecinueve Administrativo de Cali

En mérito de lo anterior, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

### RESUELVE

**PRIMERO: CONFIRMAR** el auto del 12 de junio de 2017 proferido por el Juzgado Diecinueve Administrativo de Cali que decretó las medidas cautelares solicitadas por la parte ejecutante.

**SEGUNDO:** En firme la presente decisión, devolver el expediente al Juzgado de origen.

### NOTIFÍQUESE

El proyecto de esta providencia se discutió y aprobó en Acta de la fecha.



VÍCTOR ADOLEO HERNÁNDEZ DÍAZ  
Magistrado



ZORANNY CASTILLO OTÁLORA  
Magistrada



ANA MARGOTH CHAMORRO BENAVIDES  
Magistrada

**SALVA VOTO**